

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACION - SENTENCIA	
DEMANDANTE	ALFONSO ARRAUTT BENAVIDES
DEMANDADOS	SEGURIDAD SINAI LTDA. EN LIQUIDACION JUDICIAL
RADICADO	05001-31-05-013-2017-00624-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Relación laboral durante proceso de reestructuración empresarial - pago aportes a pensión.
DECISIÓN	Confirma.

*Medellín, veinticuatro (24) de junio de dos mil veintidós (2022)*

*Estudiado, discutido, y aprobado en Sala virtual.*

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso promovido por el señor **ALFONSO ARRAUTT BENAVIDES** contra la empresa **SEGURIDAD SINAI LTDA. EN LIQUIDACION JUDICIAL**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 028** se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

## **I. – ASUNTO**

Es materia de la Litis resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora apoderada de la sociedad demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día el 6 de abril de 2021, dentro del proceso referenciado.

## **II. – HECHOS DE LA DEMANDA**

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, lo siguiente: Entre la sociedad SEGURIDAD SINAIL TDA Y EL ACTOR se celebró un contrato de trabajo verbal, a término indefinido, que inició el 24 de febrero del 2016 y terminó el 3 de julio del año 2016, a través del cual se vinculaba al primero para desempeñar el oficio de GUARDA DE SEGURIDAD; como salario se pactó la suma de \$1 '030.000, pagaderos de forma quincenal. cantidad que se mantuvo constante durante lo relación laboral; la labor encomendada fue ejecutada por el actor de manera personal, atendiendo las instrucciones del empleador y cumpliendo con el horario de trabajo señalado por éste, sin que se llegara a presentar queja alguna o llamado de atención en su contra; la relación contractual se mantuvo por un término de 4 meses y 9 días hasta que, con fecha de 3 de Julio del año 2016, el demandante presentó renuncia de manera escrita, por decisión propia.

Indica el introductorio que empresa SEGURIDAD SINAI LTDA adeuda al demandante cesantías, Intereses de cesantías, vacaciones proporcionales, por el tiempo en el que se desarrolló la relación contractual; la demandada no realizó aportes a la seguridad social o favor del demandante durante lo duración de la relación laboral.

## **III. – PRETENSIONES**

La acción judicial está dirigida a que SE DECLARE que entre lo Empresa SEGURIDAD SINAI LTDA y el señor ALFONSO ARRAUTT BENAVIDES existió un contrato de trabajo verbal, a término indefinido, del 24 de febrero del año 2016 hasta el 3 de julio del año 2016 que finalizó por renuncia del actor.

Se CONDENE a la demandada a pagar al actor los siguientes conceptos: cesantías, intereses de las cesantías, vacaciones proporcionales, sanción moratoria por el no pago de las prestaciones al momento de la renuncia, pago de aportes a pensión y salud, indexación de la condena, y costas procesales.

#### **IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA**

Luego de haberse archivado el proceso ante la inactividad dela parte actora, al recibirse memorial del liquidador judicial de la demandada, informando sobre el proceso de liquidación judicial en el que se encuentra inmersa, el Juzgado de conocimiento, mediante auto de 23 de septiembre de 2019, dispuso reactivar el trámite del proceso, teniendo por notificado por conducta concluyente a la sociedad demandada del auto admisorio de la demanda dándole traslado de la misma.

Ante la falta de pronunciamiento de la demandada dentro del término concedido, mediante auto del 20 de octubre de 2019, el Despacho de origen dio por no contestada la demanda por la accionada.

#### **V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**

En audiencia pública de trámite y juzgamiento celebrada el 6 de abril de 2021, la señor JUEZ DE CONOCIMIENTO profirió sentencia mediante la cual DECLARÓ la existencia de un contrato laboral, a término indefinido, entre ALFONSO ARRAUT BENAVIDES y la empresa SEGURIDAD SINAI LTDA EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL entre el 24 de febrero del año 2016 al 3 de julio del año 2016. CONDENÓ a la demandada a pagar al actor los siguientes conceptos: Cesantías: \$394.884; intereses a las cesantías: \$17.112; vacaciones: \$183.413; indexación de las condenas. CONDENÓ a la pasiva a pagar con destino a la administradora de fondos de pensiones donde se encuentre afiliado el demandante, o de no estarlo, en la de su elección, el cálculo actuarial tendiente a validar los aportes al sistema general de seguridad social en pensiones entre el 24 de febrero del año 2016 al 3 de julio del año 2016, tomando como IBC mensual los siguientes: Febrero, \$ 137.891,00;

marzo, \$ 689.455; abril, \$ 995.700; mayo, \$ 1.010.000; junio, \$ 1.020.000; y julio, \$ 515.000.

CONDENÓ a la parte demandada, a radicar dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, ante la administradora de pensiones donde se encuentre actualmente afiliado el demandante, o de no estarlo, en la de su elección, solicitud de liquidación de los cálculos actuariales correspondientes, y pagarlos dentro del término que la entidad de seguridad social le fije. ABSOLVIÓ a la demandada de las demás pretensiones incoadas en su contra por la parte demandante, condenándola en costas de primera instancia, fijando las correspondientes agencias en derecho.

Como fundamento de su decisión, y para lo que al recurso interesa, señaló la falladora de primera instancia que, con relación con las pretensiones relativas al pago de aportes con destino al sistema general de pensiones, es de mencionar que, de conformidad con la línea jurisprudencial la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, el trabajador está legitimado claramente por activa para reclamar el pago de los aportes a la seguridad social en pensiones cuando su empleador no cancela de manera oportuna tales rubros; que igual acción tiene las diferentes administradoras de pensiones, tal como lo ha planteado esa Corporación en múltiples sentencias, siendo importante resaltar las de radicación 21378 del año 2004, radicación 38471 de 2013 y la sentencia SL 3009 de 2017. Indica que en esas providencias el alto Tribunal ha advertido claramente que el trabajador tiene el derecho a reclamar directamente de su empleador incumplido el pago de estos aportes, por lo que, para el Despacho, ante la falta de la prueba del pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, prueba que resalta corresponde a la pasiva, la demandada debe responder con el pago del cálculo actuarial tendiente a validar los aporte según el alcance del artículo 33 de la ley 100 de 1993.

Concluye que, al no reposar ninguna prueba en el plenario que de fe del pago de estos aportes en pensiones en favor del demandante en ejercicio de la relación laboral que se declara existió en esa sentencia es viable la estimación de esta pretensión, por lo que el despacho condena a la demandada a pagar el cálculo actuarial correspondiente, en los términos ya señalados.

## **VI. – APELACIÓN**

La apoderada de la demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en los siguientes términos:

Indica que en el tema del pago de pensiones (Aportes) realmente ese cobro lo debe hacer la UGPP y no el juzgado, porque no tiene (La sociedad en liquidación judicial) dinero para cancelar esos cobros, señalando que, además, en los 15 días (Que dio el despacho) es imposible dar cumplimiento a lo mismo. Señaló que esa es su sustentación que, dice, la ampliará ante el Tribunal, insistiendo que, en el tema de los cobros de la seguridad social, no están de acuerdo pues este cobro lo debe hacer la UGPP directamente, estimando que seguramente ya se hizo cuando se estuvo en la reestructuración de la empresa por la ley 1116, por lo que no está de acuerdo con esos cobros.

### **Alegatos de conclusión en segunda instancia:**

Antes de correrse traslado para alegar en esta instancia, y ante el despacho de primer grado, la apoderada de la demandada allegó memorial en el que expuso lo siguiente:

Indica que interpone recurso de apelación solicitando se revoque el numeral tercero de la sentencia de primera instancia, por medio del cual se CONDENA a la parte demandada, a radicar dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de la providencia, ante la administradora de pensiones donde se encuentra afiliado el demandante, o de no estarlo, en la de su elección, solicitud de liquidación de los cálculos actuariales correspondientes, y pagarlos dentro del término que la entidad de seguridad social le fije.

Señala que constituyen argumentos que sustentan el recurso de apelación, los siguientes:

*“1.Estas acreencias fueron cobradas en su momento por todas y cada de las entidades de aportes parafiscales donde se encuentra afiliado el*

*aquí demandante las cuales se hicieron parte dentro del proceso de Reestructuración administrativa ante la Superintendencia de Sociedad bajo la Ley 1116 de 2006.*

*2. También se tener (sic) que el objeto de La Unidad de Gestión Pensional la cual que se encarga de controlar y verificar el cumplimiento de las normatividades que rigen el Sistema de Seguridad Social y además el respectivo cobro de dichos aportes.”*

Dentro del término del traslado en esta instancia, las partes guardaron silencio.

## **VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

**Naturaleza jurídica de la pretensión. –Relación laboral durante proceso de reestructuración empresarial, pago de aportes a pensión.**

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

El objeto central de esta Litis consiste en determinar si, como aduce la censura, no hay lugar a la condena al pago del cálculo actuarial por los aportes a pensión dejados de cancelar durante la relación laboral, en los términos que ordenó la a quo.

Cabe señalar que en esta instancia no se discute la existencia de la relación laboral del actor con la sociedad demandada, con fecha de inicio el 24 de febrero del año 2016 y finalización el 3 de julio del año 2016, que declaró probada la a quo, como tampoco, los valores que por concepto de prestaciones sociales y vacaciones estableció la falladora primaria a cargo de la pasiva, ni el monto de los salarios que percibió el actor durante la relación laboral, pues estos puntos no son objeto de apelación.

Ahora, de cara al problema jurídico planteado, cabe recordar que el literal A del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 establece como característica del Sistema General de Pensiones, que *“la afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes”*; y que *“la afiliación implica la obligación de efectuar los aportes que se establezcan en la ley”*.

Por su parte, el artículo 15 de la Ley 100 de 1993 determina quienes son afiliados obligatorios al sistema general de pensiones, con la consecuente obligación de cotizar. Preceptúa la norma, que lo son *“todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos. Así mismo, las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad de servicios que adopten, los trabajadores independientes y los grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales”*.

Sobre el tema, en la Sentencia SL4698 de 2020, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, precisó:

*“La afiliación de los trabajadores particulares constituye una obligación laboral que precede a la vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, no fue solo a partir de esta que se estableció tal deber patronal como un imperativo en las relaciones del trabajo subordinadas particulares, sino que, de tiempo atrás, específicamente desde la de la Ley 90 de 1946, cuando se concibió por el legislador la existencia del ISS, se proyectó la necesidad de que los trabajadores particulares estuvieran cubiertos ante las contingencias de invalidez, vejez y muerte por un mecanismo protector de carácter económico, esto es, las pensiones de invalidez, vejez y sobrevivientes.*

*Tal propósito se desarrolló a través de los diversos reglamentos expedidos por el ente de seguridad social de manera gradual y expansiva a todo el territorio nacional, y de forma obligatoria desde el 1.º de enero de 1967, premisa que se tornó universal a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993 que cobijó a toda clase de trabajadores.*

*De ahí, que esta Sala ha señalado que «el hecho generador de las cotizaciones al sistema pensional es la relación de trabajo. El trabajo efectivo, desarrollado en favor de un empleador, causa o genera el deber de aportar al*

*sistema pensional de los trabajadores afiliados al mismo» (CSJ SL, 9 sep. 2020, rad. 60664)."*

Esta última providencia reiteró lo expuesto en sentencia CSJ SL514-2020 en la que se explicó:

*"[...] en los términos del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, la condición de cotizante está dada fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral»; en la SL8082-2015, señaló que «los trabajadores subordinados causan la cotización con la prestación del servicio», y en la SL759-2018 sostuvo que «la cotización al sistema de pensiones se origina con la actividad que como trabajador despliega el afiliado, de manera que los aportes son consecuencia inmediata de la prestación del servicio en cuyo pago y recaudo, tienen obligación empleadores y administradoras.*

*Luego, las cotizaciones pensionales son una consecuencia del trabajo; en otras palabras, se causan por el hecho de laborar y los derechos pensionales están dirigidos a garantizar al trabajador un ingreso económico periódico, tras largos años de servicio que redundan en un desgaste físico natural".*

A su vez, el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 establece:

*"ARTÍCULO 17. OBLIGATORIEDAD DE LAS COTIZACIONES. <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen".*

Y el artículo 22 de la Ley 100 de 1993 preceptúa:

*"El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el Gobierno". Además, señala el artículo 19 del Decreto 692 de 1994, que: "Durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados y empleadores.*

***El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador."***

(Negrillas fuera de texto original)

La sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado la obligación que surge en cabeza de los empleadores cuando ha existido la prestación del servicio en el marco de una relación subordinada de trabajo. En sentencia SL4698 de 2020 afirmó:

*“... esta Sala ha señalado que «el hecho generador de las cotizaciones al sistema pensional es la relación de trabajo. El trabajo efectivo, desarrollado en favor de un empleador, causa o genera el deber de aportar al sistema pensional de los trabajadores afiliados al mismo» (CSJ SL, 9 sep. 2020, rad. 60664).*

Postura jurídica que es consecuente con las disposiciones legales transcritas y que el órgano judicial de cierre ha venido reiterando a lo largo del tiempo (Sentencias SL8082-2015, SL759-2018 y SL4698 de 2020, entre otras).

Es pertinente resaltar que el literal d) del párrafo primero del artículo 9° de la Ley 797 de 2003, señala que se tendrá en cuenta, para efectos del cómputo de las semanas necesarias para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicios como trabajadores vinculados con empleadores que por omisión, no hubieren afiliado al trabajador. Lo anterior, siempre y cuando el empleador traslade, con base en un cálculo actuarial, la suma correspondiente al lapso en el cual no estuvo cotizando, a satisfacción de la entidad administradora.

En el caso bajo estudio, el actor indica en la demanda que la sociedad accionada no pagó los aportes a pensión correspondientes al tiempo en que se desarrolló la relación laboral que deprecia, y que, se resalta, fue declarada por la falladora de primer grado sin que este punto fuera objeto del recurso de apelación. Ante esta negación indefinida realizada por la activa, le correspondía a la demandada, de acuerdo a las reglas de la carga probatoria establecidas en el artículo 167 del CGP, acreditar que sí se efectuaron los pagos de dichos aportes, carga que no cumplió toda vez que no hay prueba alguna que se hubieran efectuados esos pagos al respecto.

Ahora, cabe advertir que se encuentra acreditado en el proceso, de acuerdo al certificado de existencia y representación legal, obrante a folios 8 a

15 de la carpeta digita denominada “*MemorialLiquidador*” que contine los documentos que fueron incorporados al proceso, de oficio, por la Juez de instancia, que la sociedad demandada estuvo inmersa en un proceso de validación judicial de un acuerdo extrajudicial de reorganización, de conformidad con lo establecido en la Ley 1116 de 2006, cuyas etapas se registraron en dicho certificado de la siguiente forma:

*“En Virtud de la Ley 1116 de 2006 mediante Aviso No. 415-000025 del 13 de marzo de 2015, inscrito el 24 de abril de 2015 bajo el No. 00002459 del libro XIX, la Superintendencia de Sociedades informa que se decretó la apertura del proceso de validación judicial de un acuerdo extrajudicial de reorganización en la sociedad de la referencia.*

*En Virtud de la Ley 1116 de 2006 mediante Auto No. 400-003775 del 4 de marzo de 2015, inscrito el 24 de abril de 2015 bajo el No. 00002459 del libro XIX, la Superintendencia de Sociedades resuelve decretar la apertura del proceso de validación judicial de un acuerdo extrajudicial de reorganización en la sociedad de la referencia.*

*En Virtud de la Ley 1116 de 2006, mediante Auto No. 430-000629 del 10 de julio de 2015, inscrito el 14 de agosto de 2015 bajo el No. 00002552 del libro XIX, la Superintendencia de Sociedades resuelve autorizar el acuerdo extrajudicial de reorganización celebrado entre los acreedores internos y externos de la sociedad de la referencia.”*

Y, según este documento, ante el incumplimiento de dicho acuerdo, se dispuso:

*En virtud de la Ley 1116 de 2006, mediante Acta No. 425-000360 del 05 de abril de 2019, inscrito el 13 de Mayo de 2019, bajo el No. 00004183 del libro XIX, la Superintendencia de Sociedades, declara el incumplimiento del acuerdo de reorganización y ordena la apertura del proceso de liquidación judicial en la sociedad de la referencia.*

*Mediante Acta No. 406-001191 del 11 de noviembre de 2020, la Superintendencia de Sociedades en virtud de la ley 1116 de 2006, resuelve adjudicar los bienes dentro del proceso de liquidación de la sociedad de la referencia y ordena la inscripción de esta providencia y de la parte pertinente del acta conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 1116 de 2006 y 5 de Decreto 2785 de 2008, lo cual fue inscrito ante esta Cámara de Comercio el 15 de Enero de 2021 con el 00005100 del libro XIX.”*

Como puede observarse, la relación laboral que en este proceso se declara, cuyo hito temporal de inicio es el 24 de febrero del año 2016 y de finalización el 3 de julio del año 2016, se desarrolló encontrándose la sociedad

demandada dentro de ese acuerdo extrajudicial de reorganización bajo los lineamientos de la ley 1116 de 2006, resaltando la Sala que en el proceso judicial de liquidación adelantado por la Superintendencia de Sociedades no se incluyó acreencia alguna del accionante, o de la UGPP por aportes a seguridad social en pensiones, observándose en esa lista, por cobros sobre este último concepto, a Fondos de Pensiones, como Porvenir, Colfondos, Protección y Colpensiones.

Es importante precisar que la UGPP, en su función de control del cumplimiento de los estándares normativos obligatorios del Sistema de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 es competente adelantar las acciones de determinación y cobro de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, respecto de los omisos e inexactos, sin que se requieran actuaciones persuasivas previas por parte de las administradoras, contribuciones éstas que corresponden a los aportes con destino al Sistema de Seguridad Social Integral conformado por el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, y a los establecidos con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Régimen de Subsidio Familiar (Decreto 2033 de 2013)

Sin embargo, no hay prueba alguna en el proceso de la cual se pueda establecer que la UGPP haya ejercido esa función de vigilancia y cobro respecto al pago de aportes en pensión, concretamente, con relación al actor, o que tuviera conocimiento que éste fuera trabajador de la empresa demandada, sociedad que, para el momento de la relación laboral, se encontraba en acuerdo de reorganización, para efectos de ejercer las acciones de cobro correspondientes. Es más, al no haberse presentado pago alguno de aportes a pensión en vigencia del vínculo laboral de autos, hecho que no fue desvirtuado por la demandada, quien por demás no contestó la demanda, se infiere que no hubo afiliación del actor como trabajador, a un fondo de pensiones, por parte de la sociedad demandada como empleadora, en ese lapso, razón demás para concluir que tal omisión no fue de conocimiento de la UGPP.

Dentro de ese contexto, al no haberse acreditado pagos o, algún cobro, de los aportes a pensión que se causaron durante la relación laboral que nos ocupa, o bien, dentro de la ejecución del acuerdo extrajudicial de reorganización, o, con posterioridad, en el proceso de liquidación judicial de la empresa demandada, es claro que la pasiva, ya ante la jurisdicción ordinaria laboral, debe pagar esos aportes a pensión, previo cálculo actuarial, de acuerdo a los parámetros establecidos por la a quo, siendo razonable el término de 15 días concedido por ésta para presentar la solicitud de liquidación de dicho cálculo ante la administradora de pensiones donde se encuentre actualmente afiliado el demandante, o de no estarlo, en la de su elección, así como también, que sea la entidad de seguridad social la que fije el término para cancelarlo.

Ahora, no es de recibo lo manifestado por la recurrente en el sentido de indicar que no se condene al pago de los aportes a la seguridad social en pensiones porque no tienen dinero para ello, no solo porque nada dijo frente a la condena por prestaciones sociales y vacaciones frente a la cual no manifestó reparo alguno, de lo que se infiere que cuentan con el dinero suficiente para pagar dicha condena, sino porque tal circunstancia no puede trasladarse al trabajador y afectar sus derechos a la seguridad social.

Por lo anteriormente señalado, se confirmará en su integridad la sentencia de primer grado, condenando en costas a la demandada ante la improsperidad del recurso interpuesto por ésta, dentro de las cuales se fija, como agencias en derecho, la suma de \$1.000.000.

## **VIII. DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia objeto apelación, de origen y fecha conocidos, por lo indicado en la parte motiva.

**SEGUNDO: COSTAS** procesales en esta instancia a cargo de la sociedad demandada, dentro de las cuales se fija, como agencias en derecho, la suma de \$1.000.000.

**TERCERO:** En su oportunidad procesal, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

**CUARTO: SE ORDENA** la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

**Los magistrados**

  
**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**  
Magistrada

  
**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**  
Magistrado

  
**LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**  
Magistrada